El SAM y la geometría

Gustavo Esteva*

I. CONTENIDO Y RANGO DEL SAM

El Sistema alimentario mexicano es una propuesta estratégica de desarrollo, planteada a la Nación por el Presidente de la República. (En México, Jefe del Gobierno y Jefe del Estado). Representa un viraje respecto al modelo de desarrollo vigente en los siguientes planos:

1. La orientación de la producción.

Implica que la lógica de las necesidades sociales se imponga sobre la del capital nacional y transnacional en la configuración de las pautas de producción y consumo. A fin

* Profesor e Investigador de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM.

Nueva Antropología, Año V, No. 17, México 1981
de “lograr una alimentación suficiente, aunque sea mínima, para todos los mexicanos”, y alcanzar la autosuficiencia en la producción nacional de alimentos, supone la reasignación de los recursos públicos de fomento agropecuario, cuyos destinos y destinatarios tendrían que modificarse radicalmente, sino también transformar a fondo las estructuras y formas de organización social en el medio rural. “No se trata simplemente de aumentar la producción del país, sino de aumentar el ingreso de los campesinos”. Para ello, se plantea asumir con los campesinos el riesgo productivo, subsidiar el cambio tecnológico, y apoyar los procesos de organización.

2. El desarrollo social.

El SAM propone relegar a segundo término las prioridades convencionales (zonas de riego y empresarios del campo), para concentrarse en “los campesinos empobrecidos del temporal”. Esté viraje en la definición de los actores centrales de los procesos productivos, no solo supone la reasignación de los recursos públicos de fomento agropecuario, cuyos destinos y destinatarios tendrían que modificarse radicalmente, sino también transformar a fondo las estructuras y formas de organización social en el medio rural. “No se trata simplemente de aumentar la producción del país, sino de aumentar el ingreso de los campesinos”. Para ello, se plantea asumir con los campesinos el riesgo productivo, subsidiar el cambio tecnológico, y apoyar los procesos de organización.

3. La acción administrativa del Estado.

El SAM plantea alterar las pautas vigentes de acción oficial en el campo, basadas en criterios sectoriales (por ramas de actividad) e institucionales (por dependencias responsables), pues se define como “una estrategia especial dentro del Plan global de desarrollo: no es un plan adicional a otros, sino un procedimiento que ordena las acciones para coordinarlas”. Implica un compromiso global del Estado, que no se finca en una dependencia específica o en determinados funcionarios, sino en el conjunto de la administración.

---

1 López Portillo, José, “Una alimentación suficiente, objetivo prioritario”, en Dar la batalla a la alimentación, México, CNC, agosto de 1980, págs. 1 y 2.
2 Oficina de Asesores del C. Presidente de la República, Sistema Alimentario Mexicano, Primer Planteamiento de Metas de Consumo y Estrategia de Producción de Alimentos Básicos, México, Presidencia de la República, marzo de 1980, pág. 21.
3 López Portillo, José, op. cit., pág. 1.
4 Oficina de..., op. cit., pág. 22.
5 López Portillo, José, op. cit., pág. 1.
pública y, en última instancia, en el Jefe del Ejecutivo.

Esto es el SAM: una propuesta política y de política del Estado mexicano. Por su forma inicial (un documento técnico y un discurso político) se le ha querido ver como fantasma de gabinete, o simple ejercicio retórico y demagógico. Resultan ser ambas cosas tales apreciaciones; pero no el SAM, cuando en vez de la apariencia se considera su génesis, su contenido sustantivo y sus alcances.

Consideramos ante todo su gestación. En el plano de lo inmediato, aparece como una iniciativa del Ejecutivo. Pero no se trata de una ocurrencia o de un gesto originario. La “iniciativa” es, en realidad, la forma específica de una respuesta ante el conjunto de procesos que se expresan en la crisis rural desde hace muchos años. Solo es posible explicar y comprender esa forma específica en el contexto de su gestación social y política, directamente vinculada en la movilización campesina.

Los campesinos constituyen una fuerza sustantiva del México moderno, sin la cual no puede concebirse ni llevarse a la práctica el proyecto histórico de la nación, de sus trabajadores. Pero fuerza dominada. Se inscribió irrenunciablemente en el proyecto nacional, pero no se insertó en el modelo mexicano de desarrollo (el proyecto de sus estructuras de dominación), porqué este es excluyente de los campesinos: tiende indefectiblemente a suprimirlos del mapa de las fuerzas sociales.

Tiende y ha tendido a excluirlas. Pero no lo ha conseguido. Los campesinos, en cambio, se han transformado a sí mismos en el proceso de sus contradicciones, y han dado nueva vitalidad a la fuerza material que representan. Su movilización y organización, en los años setentas, aunadas a los múltiples factores de crisis presentes en esa década, dieron creciente visibilidad social a los problemas del campo y a los propios campesinos, y alteraron profundamente las condiciones de desarrollo del conflicto social. Esto, a su vez, estimuló la realización de investigaciones y análisis que, de una u otra manera, repercutieron en las formas de conciencia de la crisis, y sirvieron de antecedentes para la formulación de las alternativas que surgían como reacciones objetivas ante los fenómenos en curso.

Cabe así la conjetura de que “la conciencia política de la crisis se convirtió también en una conciencia teórica de la misma, que terminó por permear las altas esferas del Estado”, cuya impermeabilidad a los problemas campesinos era manifiesta desde los años cuarentas, y cuya costra política e ideológica no se rompió con los intentos al respecto realizados en los años setentas. Cabe también plantear que
“el SAM surge como una conden-sación social de la crisis y del empu-je del malestar campesino”, y que la necesidad política “de rever-tir las tendencias que provocaron el estancamiento del desarrollo rural obligó al Estado a tomar la decisión de restituir a los campesinos los recursos que sistemáticamente se les extraían”.  

En un sentido muy concreto, el SAM representa una hazaría de conciencia pública, que es preciso reconocer como tal, sin matices. Asumir el significado e importancia de la fuerza material concreta de los campesinos, darle forma programática, establecer su relación con las necesidades actuales del país y con sus contradicciones internas y externas, y elaborar los elementos de una estrategia rural que se asocia con la construcción del proyecto nacional, son tareas en las que han estado empeñándose los grupos más lúcidos y avanzados de este país, desde hace muchos años, y que encuentran, en este esquema, una de sus expresiones más redondas.

Sin embargo, ante la criatura recién nacida, que no encuentra aún el contexto político —la moviliza-ción popular— que puede darle realidad cabal a su contenido, se emprendió la labor destructiva:

De una parte, desde las estructuras de dominación puestas formalmente en jaque por el SAM, en vez del ataque frontal o la crítica abier-ta, se empleó la táctica opuesta: asumir como propio el esquema, aunque no lo fuera, para despojarlo de su contenido propio. Se trataba, muy concretamente, de este-rilizarlo: convertirlo en una simple entelequia administrativa, en su ajuste burocrático o presupuestal, en la actualización y adaptación del es-fuerzo en curso, en otra vuelta de tuerca de un modelo que debía permanecer intocado. Lo hicieron así y lo siguen haciendo, cotidiana-mente, quienes creen que el mundo es un objeto que hay que manipular; quienes entienden al Poder Público como el único protagonista de la sociedad; quienes entienden al poder, desde el poder, como ejercicio excluyente; quienes a cada paso se empeñan en cambiarlo todo para que nada cambie.

De otra parte, tendieron a desem-pear la misma función: formulaciones “críticas” que han operado como contrapartida mecánica del discurso de la dominación, tomando como punto de partida una vieja actitud dogmática. La simplificación maniquea o el conocido maximalis-mo bloquearon la percepción de la génesis y contenido del SAM. El reduccionismo abstracto condujo a negar la intervención campesina en las condiciones que determina-

6 Andrade, Armando, “El SAM: la cuestión de la viabilidad”, conferencia pronunciada el 18 de septiembre de 1980, pág. 1 (mimeog.).
ron al SAM (como respuesta política del Estado ante la movilización social), lo cual no solo impidió examinar con sentido crítico la propuesta misma, sino que también se ajustó puntualmente al intento de exclusión que se ejerce todos los días sobre los campesinos, lo mismo en la teoría que en la práctica, en la academia al igual que en la política.

De ahí la importancia de dar forma a respuestas orgánicas, auténticamente emanadas del pueblo, capaces de tomar en sus manos un proceso que es en verdad el suyo. Es preciso tener clara conciencia de las enormes dificultades de llevar realmente a la práctica una propuesta de esta índole: percibir que se trata de una transformación profunda; de una vía que pretende dar un viraje radical a la pauta seguida hasta ahora; de una posibilidad inédita en su dimensión, aunque ampliamente fundada en la experiencia empírica. Todo ello exige, ante todo, para el examen crítico y la acción política, enfrentarse con rigor al problema de la caracterización de los campesinos, que aún parece envuelta en el dogma y el prejuicio.

II. EL SAM Y LA CUESTION CAMPESINA

1. ¿Quienes son los campesinos?

N.A. 17

Para percibir e identificar a un grupo humano, como acto de reconocimiento, es preciso, ante todo, preguntarse “por qué los grupos sociales se distancian a sí mismos de otros, y elaborar tales distinciones”. La respuesta exige una explicación que rebasa el marco de teorías “culturalistas” de la etnicidad: “una explicación, en términos de interés, porque no se trata nada más de alguna propensión a clasificar”. La cultura “no es, simplemente, un fenómeno cognitivo, ni es tan solo algo que los grupos ‘tienen’. Es algo, asimismo que se usa para promover intereses, y no exclusivamente intereses materiales, aunque siempre sea necesario acomodarlos a estos”.

Para reconocer a los campesinos, es indispensable tomar como punto de partida su propio proceso de identificación (clasificación): percibir que, como grupo humano, son resultado de una movilización específica (vinculada en la lucha por la tierra), y también de una forma propia de organización resultante de esa movilización, que se reconstituye y dinamiza permanentemente. Todo ello aparece como expresión de intereses, los que identifican al grupo como tal (como comunidad de intereses). “Y no exclusiva-

7 Worsley, Peter M., *Marxisme and culture*, University of Manchester, Manchester, 1980, pág. 20.
mente intereses materiales, aunque siempre sea necesario acomodarlos a estos".

Es lugar común relacionar la lucha por la tierra con los campesinos. Lo que no lo es tanto, es diferenciar las luchas pasadas de las actuales. En México, los campesinos fueron despojados de su tierra durante el siglo XIX, y al empezar el actual habían dejado de ser lo que eran. Si bien su nueva lucha retiene múltiples apariencias de las anteriores, es cualitativamente distinta. Con ella se constituyen como un grupo emergente en el mapa social: una clase en formación, no en extinción; una realidad postcapitalista, no precapitalista, que se produce en el seno del capitalismo y en modo alguno puede ser vista como supervivencia.

Las condiciones de gestación de un grupo humano no tienen por qué ser idénticas a las de su existencia y desarrollo. La lucha por la tierra hizo campesino al grupo; pero este solo se constituye como tal en la organización que permanece y se desarrolla después de la conquista de la tierra que hizo posible su emergencia.

Lo específico de un grupo humano, lo que da realidad al casillero de una clasificación de individuos, no es su apariencia o condición manifiesta (ni siquiera las clásicas "condiciones objetivas" analizadas fuera de la dinámica social). Es su organización: en este caso, una organización orientada a la producción y reproducción de la vida social del grupo, que finca su vitalidad en sus fuerzas endógenas, a fin de garantizar formas alternativas de relación con las fuerzas exógenas adversas, a fin de asegurar la supervivencia y desarrollo del grupo, e incluso plantearse proyectos que trascienden esa relación.

Los campesinos no están al margen de la economía capitalista o funcionan en forma paralela al mercado. Mantienen permanentemente relaciones sociales de producción con los capitalistas, bajo las formas más heterogéneas: pueden o no tener un salario temporal o permanente, pero este o sus equivalentes no pueden garantizar su reproducción vital. Este hecho histórico, al que se han enfrentado los trabajadores desde el origen del capitalismo, ha dado lugar a una lucha estratégica por arrancar a los capi-

---


9 El término postcapitalista no se emplea aquí, obviamente, para aludir a una realidad correspondiente a un régimen posterior al capitalismo, sino para subrayar su surgimiento a raíz de la implantación capitalista, como producto de este régimen de producción, y apuntar, a la vez, sus potencialidades para dejarlo atrás.
talistas esa garantía, indispensable ante la tendencia a la expansión ilimitada del ejército de reserva y a la periódica caída en el salario real. Sin renunciar a esta lucha, que deriva en conquistas como el seguro de desempleo o la garantía contractual del empleo, los campesinos han adoptado, además, la estrategia de ocuparse de sí mismos: ejercer una autonomía relativa que haga depender de sus propios recursos la reproducción y desarrollo de la vida individual y social. (No es un acto voluntarista o una ocurrencia, desde luego, sino una respuesta colectiva a un hecho social).

Los grupos sociales no se constituyen de pronto, ni de una vez y para siempre. No es una lógica abstracta lo que separa y distingue a unos grupos de otros: no existe el grupo de los hombres de nariz corta y pestañas rizadas, aunque sea posible localizar esos atributos empíricos en cierto número de sujetos que en ese sentido son diferentes de los demás. Los hombres trazan sus distancias unos de otros, como hecho cultural radical, en función de intereses concretos que, entre otras cosas, suponen reconocer diferencias dentro del grupo, tanto como hacía afuera.

Por el hecho de ser trabajadores, los campesinos no estaban preconstituidos como clase. Por sus condiciones objetivas de existencia, por la separación entre su fuerza de trabajo y sus condiciones de trabajo, compartían con otros trabajadores una potencialidad de organización y pertenencia; pero solo se constituyeron como clase, y dentro de ella como grupo o fracción con rasgos específicos, cuando realizaron un intento de reintegración de esas condiciones objetivas, tratando de poner bajo control directo y colectivo del grupo las condiciones de trabajo y el uso de la fuerza de trabajo.

Esta fundación original, sin embargo, no constituye una camisa de fuerza, sino una base dinámica para enfrentarse a las condiciones cambiantes que definen la existencia y desarrollo del grupo. Aquel intento de reintegración queda expuesto de inmediato a nuevas formas de enajenación, porque el grupo de encuentra inmerso en una realidad capitalista con otras leyes de funcionamiento, que les separa de nuevo, por otras vías, las condiciones de trabajo del uso de la fuerza de trabajo, pasando, cuando es preciso, por encima de las trabas de la propiedad. La tierra que el grupo campesino ha conquistado, por ejemplo, como la materia sobre la cual puede ejercer su esfuerzo productivo en forma autónoma, se le convierte en propiedad virtual: no puede ejercer libremente sus derechos sobre ella, porque está sometido a relaciones sociales que le imponen las condiciones de su utilización, y así le enajenan, no solo los frutos del esfuerzo productivo, sino también
el control del propio proceso productivo.

De esta manera, la tierra deja de ser condición necesaria de existencia de los campesinos. Puede seguir siendo el pretexto objetivo de la cohesión del grupo, en unos casos, pero ha dejado de ser sustancia de la campesinadad, ahora definida por la organización social que da a su trabajo directo para la fábrica social ciertas modalidades específicas que operan como garantía de reproducción.

El hecho de que la producción directa para la fábrica social de los campesinos no tenga como condición necesaria la intermediación del capital ni implica que se encuentren al margen de la operación capitalista. De hecho, su relación es más densamente capitalista que la de otros trabajadores, porque sus contradicciones económicas son directas e inmediatamente políticas: son, per se, contradicciones de clase. No operan como disputas por el valor entre agentes específicos, sino como contradicciones con la sociedad "como un todo", o sea, con el establecimiento capitalista. De ahí que tiendan a ser contradicciones con el Estado, como instancia política que expresa y en la que se expresan las contradicciones de clase y las correlaciones de fuerzas.

Esta sustancia de los campesinos determina que se mantengan en reconstitución permanente. La recuperación y renovación de antiguas pautas de relación social (lo que había hecho pensar en "super vivencias") o la extrema heterogeneidad en actividades, comportamientos y formas organizativas (lo que había puesto en duda la existencia de una sustancia común constitutiva de un grupo social) son condiciones características de existencia de los campesinos. No hay misterio en ellas una vez que se logra detectar su razón de ser y su sentido en la realidad emergente y dinámica que constituyen y reconstituyen constantemente.

Es la comunidad la que define al hombre, no el hombre a la comunidad. Al caracterizar a los campesinos, de acuerdo con sus organizaciones sociales específicas, se reconoce, simplemente, una forma de existencia social tan antigua como novedosa, que surgió entre nosotros sin que fuéramos capaces de percibir su naturaleza y sentido por la

---

10 El concepto de "trabajo directo para la fábrica social" se apoya en el de capital social, como forma real de existencia del capital, del que los capitalistas son personificaciones. Véase, al respecto, Cleaver, Harry, Reading Capital Politically, University of Texas Press, Austin, E.U., 1979. Este enfoque teórico resulta indispensable para la comprensión de la realidad campesina y de la de otros muchos grupos sociales en las sociedades capitalistas modernas.
medida en que lo impidieron los antojo cargados de prejuicio que se negaban a conocer y reconocer toda forma de existencia social distinta de la propia. Se le desconoció, como ignorancia real o como rechazo inconsciente, sobre todo, por la percepción, así fuese difusa, de la amenaza real o potencial que esa realidad desconocida podía plantear para las formas de existencia social establecidas.

Esta caracterización alternativa de los campesinos puede plantearse como el marco teórico en que se desarrolló el SAM, de la misma manera que la crisis rural y la movilización campesina establecieron las condiciones objetivas de su gestación. Pero la exclusión teórica e ideológica de los campesinos en las caracterizaciones convencionales no era sino el reflejo abstracto de una exclusión objetiva, realizada según el modelo mexicano de desarrollo configurado desde los años cuarentas. Y este, a su vez, no ha sido otra cosa que el resultado de una correlación política de fuerzas que constituyó el bloque histórico de grupos sociales que determinó la orientación y composición del Estado mexicano en estos años. Para apreciar el significado del SAM, en ese marco político de circunstancias, y establecer en qué medida puede representar un viraje respecto a aquel modelo, es indispensable hacer referencia, así sea brevemente, al problema de la inserción de los campesinos en la configuración política del Estado mexicano en este siglo.\textsuperscript{11}

2. \textit{La historia de un amor imposible}

Las relaciones del Estado mexicano y su Poder Público con los campesinos podrían ser descritas como la historia de un amor imposible. Peligrosamente imposible.

Las cosas empezaron con un romance tormentoso. La hegemonía militar de los ejércitos campesinos, al estallar la revolución, nunca equivalió a capacidad de conquistar y ejercer el poder político y económico. Su visión resultaba irremediablemente anarquista: la enorme fuerza de su densidad histórica se fincaba en la autonomía de los pueblos, y en ellos se concentraba su horizonte. No se plantearon, obviamente, el problema del Estado. Pero de hecho se colocaban al margen de él, y con las armas en la mano. Y esto implicaba colocarse contra él.

Los primeros gobiernos revolucionarios no podían prescindir del zapatismo. Era imposible governar sin tenerlo en cuenta o enfrentándolo; pero tampoco era posible

\textsuperscript{11} En el siguiente inciso se presenta sintéticamente la posición del autor al respecto, desarrollada sobre todo en \textit{La batalla en el México rural}, México, Siglo XXI editores, 1980.
gobernar con él. Solo cabía mantener una política de concesiones, tan parcas como se pudiera. Luis Cabrera lo dijo, brillantemente desde su famoso discurso del 3 de diciembre de 1912: "La población rural necesita completar su salario: si tuviese ejidos, la mitad del año trabajaría como jornalera y la otra mitad del año aplicaría sus energías a esquilmarlos por su cuenta. No teniéndolos, se ve obligada a vivir seis meses del jornal, y los otros seis meses toma el rifle y es zapatista".

Para Cabrera, "ciertas clases rurales siempre y necesariamente tendrán que ser clases servidoras, necesariamente tendrán que ser jornaleras; pero ahora ya no podremos continuar el sistema de emplear la fuerza política del Gobierno en forzar a esas clases a trabajar todo el año en las haciendas a bajísimos salarios... Los grandes propietarios rurales necesitan resolverse a ensayar nuevos sistemas de explotación". Se trataba muy claramente, por tanto, de reconstituir ejidos, como un expediente transitorio, y como un medio para complementar el ingreso campesino, "por medios constitucionales, por medios legales que traigan implícito el respeto a la propiedad privada". Y, sin excederse, desde luego. "Es de calcularse que solamente en los distritos rurales de la Mesa Central es donde se necesita la reconstitución de ejidos; en el norte del país, no es necesaria". (Lo que demuestra, por cierto, que al hablar de mejores sistemas de explotación, don Luis Cabrera no se refería a la entonces banal proposición de que las haciendas ganaderas sembraran granos).

Hacia 1930, la política de concesiones ya había significado repartir más de diez millones de hectáreas, crear el banco ejidal, y muchas otras cosas. Pero el Estado, mientras tanto, creó su partido y la correlación de fuerzas se modificó. Ahora parecía posible y necesario modificcar el esquema de compromisos. Calles creyó conveniente que "los hijos de la Revolución" reconociesen el fracaso del agrarismo, al menos, como había sido llevado hasta entonces. No más ejidos. Era necesario concentrar el esfuerzo en la propiedad privada, que aún ocupaba la inmensa mayoría del territorio, y dar por terminado el tormentoso romance del Estado mexicano y de su Poder Público con los campesinos. Zapata llevaba ya diez años de muerto. Era tiempo de enterrarlo para siempre.

Como se sabe, la idea de Calles resultó precipitada. La movilización campesina no solo permitió enfrentarse a los vientos antiagraristas del momento, sino que también fue capaz, mediante un nuevo juego de alianzas, de impulsar otro proyecto. Había quedado atrás su miopía anarquista, y podían concebirse otras ilusiones. Ramón Beteta las formuló en términos que parecían generalizados entre los cardenistas de 1935:
“Creemos que México se halla en una posición privilegiada para decidir su destino. Observando los efectos de la última crisis del mundo capitalista, creemos que podríamos utilizar las ventajas de la era industrial sin tener que padecer de sus bien conocidos defectos... Hemos soñado un México de ejidos y pequeñas comunidades industriales, electrificado, con sanidad, donde los bienes serán producidos para satisfacer las necesidades de la población, donde la maquinaria será empleada en aliviar al hombre de los trabajos pesados, y no para la llamada sobre-producción”.

Tres años después, cuando Cárdenas había repartido ya más tierras que todos los gobiernos anteriores juntos, dio una expresión concreta a la alianza obrero-campesina en que sustentaba su obra: inauguró, el 10 de febrero de 1938, el ingenio azucarero ejidal “Emiliano Zapata”, de Zacatepec. “Ingenio moderno, anotó en los Apuntes, planeado por la actual administración con fines sociales para mejorar las condiciones económicas de los ejidatarios... Se manejará bajo el sistema de cooperativa integrada por los ejidatarios y trabajadores de la fábrica... Actos como este son mi mayor satisfacción”.

El 24 de febrero —tres semanas antes de la expropiación petrolera— Cárdenas asistió al primer congreso de la CTM, donde sometió a la consideración de los delegados de todo el país la idea de convocar a un Congreso Mundial de Trabajadores.

“Los trabajadores organizados, dijo, deben patentizar que su lucha social obedece a una ética superior, como es el respeto a la vida humana y el derecho y soberanía de los pueblos; que la ciencia y la técnica deben utilizarse para el bienestar común y no para la destrucción. Esto se logrará con la unidad de la clase trabajadora. La obra del imperialismo es sojuzgar y destruir”.

Como se sabe, los vientos cambiaron. También se sabe cómo: rompiendo la alianza entre obreros y campesinos, por ejemplo. Y por qué. Al tomar posesión, el Presidente Avila Camacho aseguró que el futuro de México se basaría en “la energía vital de la iniciativa privada”. Advirtió, en particular, que “aumentaría la protección a las propiedades agrícolas privadas, no solo para defender las que ya existen, sino también para formar nuevas propiedades privadas en vastas regiones no cultivadas”. La agricultura no sería ya la base del desarrollo rural, sino la clave para echar “los cimientos de la grandeza industrial”. Ramón Beteta olvidó sus anteriores ilusiones, y fue uno de los artífices financieros del proceso “modernizador”.

De esto se trataba, en definitiva. Al banquete de la revolución industrial asistirían, ante todo, inversionistas privados nacionales y
extranjeros, cuya “energía vital” aseguraría un porvenir mejor para todos. Estarían también los grandes agricultores y ganaderos, que alimentarían al país y crearían buenos empleos para los obreros agrícolas. Los obreros organizados también podrían participar, aunque así la alianza cobrara un aspecto impío; si bien su porción global en el pastel social tendría que reducirse, al menos, podrían mejorar, año tras año, sus ingresos reales (como ocurrió de hecho durante tres décadas). Pero los campesinos no estaban invitados. No tenían cabida en esta nueva tierra prometida. Esas clases que habrían de ser “siempre y necesariamente servidoras” no tenían más función que ocuparse en su propia reproducción, para poder contratarse a bajo precio en las modernas explotaciones... mientras lograban extinguirse.

Para fundar la moderna agricultura, era preciso volver los ojos al norte, donde se encontraba la mayor parte de las haciendas aún existentes: dos tercios de las de más de mil hectáreas, el 61% de las de más de 10 000 y el grueso de las más de 40 000. Y como solo les faltaba riego para que hiciesen su contribución, en él era preciso concentrarse. El 90% del presupuesto de fomento agropecuario se dedicó a ello en los años cuarenta. Los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California Norte, Chihuahua y Coahuila recibieron casi el 60% de las inversiones de riego, entre 1941 y 1970. Los tres primeros absorbieron el 40%: tres estados que tenían en 1940 la quinta parte de las grandes propiedades privadas existentes en el país, pero solo el 9% de los ejidos y el 6% de los ejidatarios. La sospecha de Luis Cabrera se cumplió.

La novia vestida y alborotada vio transcurrir hasta su agotamiento este matrimonio de conveniencia. Vio de qué manera se le recordaba en los discursos, oficiales o no, solo para explotarla, humillarla y perseguirla. Fue perdiendo toda esperanza de entrar en ese banquete y desplazar a la intrusa. Aprendió a confiar solamente en sí misma.

El Estado mexicano y su Poder Público, como la sociedad entera, necesitan hoy de los campesinos, que no lograron extinguirse. Contar con ellos es condición para construir cualquier proyecto histórico nacional que pueda recibir dignamente ese nombre. Se sabe que la indispensable meta de la autosuficiencia no podrá provenir de la agricultura privilegiada, concentrada en los cultivos de exportación y en la atención de una capa selecta de la población. El país necesita que los campesinos produzcan para todos, y que, además, se ocupen en sí mismos, de darse subsistencia y desarrollo, de elevar su ingreso y su condición de vida. Y se les ofrece, para ello, un modesto lugar en la mesa, hoy aderezada con petróleo.
¿Tiene algo de extraño que los campesinos se muestren desconfiados ante la oferta? ¿Podría alguien reclamarles, en derecho y en razón, que no se muestren dispuestos a creer en la nueva promesa? ¿Cómo lograr que olviden sus prevenciones, si todavía ven, junto a la mano que da, otra que porta un palo...?

Tiempos nuevos y turbulentos exigen, sin embargo, nuevas alianzas. Muchos tienden a pensar que para que unos entren en ellas, otros tienen que salir. Y en este proceso de reconstitución de las alianzas básicas de la sociedad mexicana, de reformulación de proyectos y esperanzas y de puesta a prueba de la capacidad del Poder Público de asumir cambios en la integración de las fuerzas que lo sustentan puede estar en juego el destino histórico del Estado mexicano.

El SAM supone, en definitiva, una reconstitución de las alianzas de clase que forman el bloque histórico de fuerzas sociales que sustenta el Estado mexicano. Su realización no puede contraerse al cambio administrativo o presupuestal en las acciones públicas. Si a ello se redujera, no pasaría de ser un ejercicio retórico cuyo carácter los hechos mismos terminarían por descubrir. Ha dicho, con razón, uno de los críticos del SAM que comparte esta preocupación por las alianzas que pueden o no darle cabal sustento político: "Si todas estas alianzas son producto de mi imaginación, solo quedan las tendencias que se observan actualmente: una mayor estatización de las actividades agropecuarias, donde el Estado se convierte en intermediario del gran capital, refuncionalizando la explotación de los trabajadores rurales, generando demanda ficticia con recursos petroleros; una aceleración de la descomposición y marginación de la población y un agravamiento de las tensiones sociales. Y el SAM reducido a un programa de ayuda alimentaria para los pobres del campo".12

No se trata, desde luego, de simplificar el asunto: el SAM o la catástrofe. Pero sí de destacar la necesidad de empeñar el esfuerzo en la construcción de juegos de alianzas que posibiliten un proyecto alternativo ante las tendencias en curso. Se trata de sugerir la reinterpretación del SAM para la definición de ese proyecto alternativo en las condiciones reales del país, habida cuenta del marco internacional de circunstancias e inhibiendo, conscientemente, las propensiones maximalistas.

3. Las peligrosas ambivalencias

El SAM, hasta hoy, sigue corriendo el peligro de empantanarse en la confusión y ser devorado por

---

12 Andrade, A., op. cit., pág. 11.
la inercia. No es tanto la confusión de las definiciones oficiales, aunque sus contradicciones y ambigüedades pueden haber contribuido a fomentarla. Es, sobre todo, el juego de ambivalencias que han expresado los interesados en el proyecto, dentro y fuera del aparato gubernamental.

Un primer elemento de confusión se refiere a la identificación del SAM con la autosuficiencia en la producción de alimentos. Como objetivo prioritario de la nación, la autosuficiencia no es aportación del SAM, ni le pertenece en propiedad, aunque es su mérito reiterarlo tan nítidamente como lo ha hecho. Hace casi diez años se adoptó en el país una postura al respecto. Ha habido, obviamente, vacilaciones y titubeos en las definiciones públicas sobre la orientación de la producción y periódicos coqueteos con la línea de política que resucita la tesis de las ventajas comparativas. Desde la crisis mundial de alimentos de 1972, sin embargo, que para México fue una delicada señal de alerta, no hay persona o grupo que se atreva abiertamente a oponerse a aquella orientación general de la política de producción agropecuaria que fue adoptada por la actual administración mucho antes de que se iniciara la formulación técnica del SAM.

Esta confusión no es gratuita ni casual. Aunque nadie lo haga abiertamente, hay personas o grupos que se han opuesto en los hechos y en las intenciones a las acciones y programas que permitirían encaminarse al objetivo de la autosuficiencia. Por eso nos hemos estado alejando de alcezarlo a lo largo de la última década. Que esas personas o grupos se encaramen ahora al SAM y le proclamen su adhesión puede ser, en algunos casos, reflejo de miopía y auténtica confusión. Pero, en general, ha de verse como una decisión consciente de emplear la vieja táctica del caballo de Troya.

La novedad del SAM consiste en destacar que ese objetivo solo podrá lograrse en la medida en que los campesinos pueden asumir la responsabilidad principal en esa tarea nacional, lo que significa dar un viraje profundo y radical en la orientación de la política agropecuaria del gobierno y en la forma de empleo de sus instrumentos y recursos. Implica también conmover hasta sus cimientos las estructuras profundas del campo mexicano, para intentar su transformación.

Y es novedad solo como definición gubernamental. Los campesinos, sus organizaciones independientes, técnicos y científicos han insistido en ella desde hace tiempo. Por décadas, empero, a pesar de la retórica agrarista, la orientación explícita de la acción gubernamental se concentró en un esquema modernizador que confió las tareas productivas a la gran agricultura comercial, nacional o transnacional, al tiempo que dejó en el abandono
y la explotación a la economía campesina, cuya extinción no solo se previó, sino que se promovió con ahínco.

Destacar del SAM solamente el objetivo de la autosuficiencia, y omitir sistemáticamente su componente campesino, se convierte así en una maniobra interesada. Entre sus éxitos, está el de haber propiciado otro género de confusión: las que han manifestado contra el SAM personas o grupos comprometidos desde siempre con la orientación que este proclama.

Algunas de estas últimas reacciones pueden ser simple fruto de la inmadurez. Como en las del adolescente aún inseguro de su sexo que se intimida al contacto, hay actitudes y comportamientos políticos de personas o grupos atribuibles a un insuficiente desarrollo de la conciencia, del carácter o de la organización del grupo: dogmatismo, desconfianza, desinformación, inseguridad, ambivalencia, confusión son actitudes propias de la adolescencia política o teórica.

Pero no cabe generalizar. La burra no era arisca. La hicieron los palos. La desconfianza puede también ser fruto del conocimiento: de la sistematización de experiencias que fundamentan incertidumbres y dudas. Cuando un alcohólico promete no tomar una copa más, es inevitable la sonrisa de escéptico en quienes le rodean.

En dimes y diretes, entre desconfianzas legítimas o neuróticas, con ambivalencias y ambigüedades, transcurre un tiempo político decisivo. Por falta de claridad, podemos estar arrojando al niño junto con el agua sucia de la bañera.

Con argumentos técnicos deleznables, o mediante el empleo del prejuicio y de la insuficiencia de información como instrumentos de persuasión, se promueven sospechas. Que ello se haga respecto a las intenciones o capacidades gubernamentales, puede ser irrelevante. Pero no lo es cuando se refiere a la bandera misma que se ha levantado con el SAM. Se le pone en entredicho solo porque la ha levantado el gobierno, en vez de ver y reconocer, pública y políticamente, que este hecho constituye un avance, una conquista, un logro popular que es indispensable reivindicar como tal.

Tales actitudes están bloqueando la posibilidad de que los campesinos, con sus organizaciones y aliados, asuman como proyecto político propio lo que del SAM es suyo. Que lo ubiquen en su contexto natural, el del conflicto social, y que con las fuerzas que han acumulado y pueden acrecentar en el proceso, intenten que el SAM se haga real en las condiciones y términos que los campesinos requieren. Para ello, habrá que enfrentarse, políticamente, a los intereses que se oponen de fondo y de principio al SAM, a la autosuficiencia y a los campesinos, aunque proclamen lo contrario.
Si logran predominar la desconfianza, el dogmatismo, la ambivalencia y la confusión, el SAM derivaría inevitablemente a una suerte de vacío social, hasta convertirse en un programa administrativo más, a desarrollarse bajo inercias institucionales en el plano local, regional o nacional, donde predominan los caballos de Troya y hegemonías adversas a los campesinos. Y estos correrían el riesgo de ser, social y políticamente, aislados, para retraerlos a la condición de fortaleza sitiada en que han estado por muchos años. La perspectiva global adquiriría tintes en extremo sombríos.

De ahí la urgencia de superar esas ambigüedades y ambivalencias en las palabras y en los hechos. Con información y conocimiento, desde luego. Pero, sobre todo, con decisión política.

Decía Bretch, en circunstancias que muestran paralelismo con las nuestras: “Ante todo, hay que aprender a estar de acuerdo. Unos hay que dicen que sí, pero en el fondo no están de acuerdo. Otros están de acuerdo en lo que no hace falta que lo estén. Ante todo, hay que aprender a estar de acuerdo”.

Aplausos y ataques al SAM resultan equivocos. No está claro el acuerdo. Ni el desacuerdo. Aunque son inevitables las ambivalencias y las contradicciones en un proyecto de naturaleza eminentemente política, preocupa la ambigüedad, aparente o real, en las tomas de posición ante él.

De acuerdo con las definiciones del SAM “no se trata solo de producir más alimentos básicos, sino de que los produzcan principalmente los campesinos”. El obstáculo más serio para elevar la producción nacional agrícola, se indica en el documento básico de la propuesta, está en la concentración del ingreso; por ello, en vez de acciones asistenciales de apoyo a los campesinos, se necesita, sobre todo, propiciar “una participación equitativa de los productores en el ingreso que genera la cadena alimentaria”.

El propósito es claro. Sus implicaciones también lo son:

a) reasignar los recursos públicos para que, en vez de seguir concentrándose en los grupos privilegiados que se beneficiaron con el modelo agotado, se canalicen prioritariamente a los campesinos;

b) basar en la justicia agraria, en la tierra y la libertad para los campesinos, los esfuerzos por corregir las pautas de distribución del ingreso;

c) sustituir estructuras de dominación y opresión que bloquean el desarrollo de los campesinos, por organizaciones de estos que permitan su participación cabal en la conducción del proceso de cambio;
ch) combatir la "modernización marginalizante" y la "desnacionalización" de la agricultura mexicana, mediante acciones e instrumentos orientados selectivamente, en función de las necesidades sociales reales.

Ante todo, puesto que estamos en una auténtica "disputa por la Nación" —como han señalado Tello y Cordera—, los proyectos de alcance nacional quieren decir distintas cosas para los distintos interesados. Suponer coincidencia total con cualquiera de ellos es una ingenuidad peligrosa. Y admitir por contra, mecánicamente, que ya no es posible en el país contar con el consenso político que requieren nuestros proyectos de transformación, refleja también un peligroso estado de desesperación, de impotencia o de ceguera. O bien, vocaciones anarquistas o autoritarias igualmente aventuradas.

Otra cuestión sustantiva se refiere al protagonista concreto de proyectos, estrategias, acciones. Puede y debe el Estado asumir sus propios compromisos: los de la orientación, contenido y eficiencia de sus actos, o de las propuestas que hace a la Nación. Pueden los ciudadanos y sus organizaciones asumir los propios y tomar posición respecto a los del Estado: rechazarlos o admitirlos, apoyarlos o criticarlos y combatirlos, confiar o no en ellos. Pero no es esto, en realidad, lo que está ocurriendo. Hemos caído más bien en un juego de espejismos y usurpaciones de función y de responsabilidad. Cuando no pedimos peras al olmo, buscamos tres pies al gato. Si nos ofrecen gato por liebre, optamos por cien pájaros volando. Ciudadanos y grupos despojados del
derecho a informar y ser informados, presos de todos en un aparato ideológico enajenado, nos enajenamos: nos hacemos ajenos entre nosotros quienes somos los mismo; pretendemos tomar por nuestras realidades que nos son ajenas; proclamamos a los cuatro vientos el pacto de la simulación.

Peca el SAM todavía, en tanto esquema que sea gubernamental, de insuficientes definiciones y prácticas operativas que den congruencia y eficiencia en la forma explícita del esquema con la acción pública en el campo, tan a menudo en contradicción con ellos.

Pecamos nosotros, los que tenemos acuerdo de fondo con aquella orientación y con sus implicaciones, y que podríamos convertir la propuesta estratégica en un proyecto lúcido y propio; pecamos de conciencia crítica y capacidad para la movilización. Cuando hemos de hacer nuestro lo que nos corresponde, como designio social profundo, y de movilizar manos y conciencias en la acción transformadora, nos atrapamos en temores, titubeos, especulaciones y suspicacias.

La hora es de gestos, no de gesticulaciones; de hechos, no de palabras: de la lucidez crítica que se ocupa en cambiar la realidad, no de la oscuridad que solo sueña, denuncia y grita, como inermes contrapartida de la simulación, que afirma la palabra como expediente para negarse a la obra e impedirla.

4. La feria de las alianzas

Tenemos poder de transformación en el campo. Nuestro país, que es el noveno productor de alimentos en el mundo, cuenta con hombres y recursos suficientes para alcanzar en breve plazo nuestras metas productivas y sociales. Hay tierras, técnicas, recursos financieros. Tenemos, como pocos, la capacidad para producir los alimentos que demanda la población y, asimismo, hacer exportaciones.

Para emplear en el sentido requerido tal poder de transformación, sin embargo, necesitamos, además, la transformación del poder: es preciso cambiar las estructuras de dominación que han bloqueado hasta ahora el desarrollo rural y nos han conducido a la crisis actual. Cambios en todos los planos: desde la modificación radical de las estructuras del poder local, para transferirlos de los caciques a los campesinos organizados, hasta el plano nacional-internacional, para impulsar nuestro proyecto histórico, y oponerlo a la nueva división internacional del trabajo en que nos inserita el capital transnacional.

Transformar el poder exige modificar el juego de alianzas que mueve nuestra sociedad: afianzar unas, disolver otras, alterar hegemonías. Ante esa necesidad, fortalecer la alianza entre obreros y campesinos, y promover su acercamiento a otros grupos, es una necesidad evidente.
Pero entre las alianzas propuestas en los últimos tiempos, hay muchas que han menester de amplia reflexión. Se insiste, por ejemplo, en la alianza entre banqueros y ejidatarios, ganaderos y minifundistas, Estado y campesinos, empresarios y trabajadores... ¿Son posibles tales alianzas? ¿Puede realizarse el SAM basado en ellas? Meter tanta gente en el morral, con tan heterogéneos y contrapuestos intereses, ¿no empobrecerá el juego de alianzas, disolviéndolo en una vaga definición de propósitos patrióticos que en la práctica significa lo contrario de lo que pretende? ¿No cabrán algunas descriminaciones elementales? ¿Todo mundo se verá igualmente beneficiado? ¿No es acaso indispensable afectar a ciertos intereses para lograr el desarrollo rural? Y si se les va a afectar, ¿cómo incorporarlos en la alianza? Puesto que resistirán con toda su fuerza, que es mucha, cualquier intento de abatir sus privilegios, ¿tiene sentido propiciar que lo hagan desde adentro de la alianza, y así desgarren la solidaridad profunda que debe caracterizarla...?

Si hablamos de la alianza Estado-campesinos, por ejemplo, que se ha considerado definitaria del SAM, ¿de quién y de qué estamos hablando?

Aceptemos un concepto genérico de campesinos, que los define como trabajadores del campo: una clase social que comparte tales intereses con los obreros, y junto con ellos se enfrenta a los del capital. ¿Cómo puede esta clase contraer una alianza con el Estado? ¿Cabe alianza, precisamente alianza, entre el representante y sus representados, entre el pueblo y su mandatario, entre la parte y el todo? Es claro que puede existir ahí solidaridad, simbiosis, identificación, o muchas otras cosas. Pero... ¿alianza?

Que el Poder Público asigne prioridad en sus acciones a ciertos grupos, que ejerza discriminación en sus comportamientos, que atienda jerarquizadamente necesidades y problemas, no es motivo de alianza, sino prescripción constitucional. Son todas ellas obligaciones estrictas del Poder Público, que encuentra en la Constitución imperativos específicos relacionados con la justicia social y con las preferencias explícitas que han de darse a ciertos grupos y clases y a determinados objetivos.

En todo caso, ¿cómo se alía la parte con el todo? ¿Puedo alian- me con mi mano, conmigo mismo? Plantear la alianza entre el Estado y los campesinos significa en rigor negar todo componente campesino en la configuración del Estado. Aunque esto agradaría a muchos, y para otros sería una simple descripción de los comportamientos habituales de las autoridades que oprimen o reprimen a los campesinos, parece inaceptable como proposición política en nuestro país.

Si se niega que el Estado represente o exprese los intereses de los
campeños, y se estima que es representante o mandatario exclusivo de otras clases que se les oponen, ¿cómo plantear la alianza? ¿no sería la negación de la esencia de ese Estado "enemigo" de los campesinos?, ¿renunciaría a ser lo que es? Con arreglo a esta concepción del Estado, por ende, es imposible plantear semejante alianza.

Si se abandona esta simplificación y se plantea que el Estado es emanación de las clases, que en él se mantienen vivas y actuantes, en su real correlación de fuerzas, constituyendo el bloque de fuerzas sociales que define y orienta el aparato gubernamental, ¿cómo plantear la alianza de ese Estado no excluyente con uno solo de sus componentes? Ello implicaría admitir que, además de ser distinto de las clases en cuya correlación e interacción se constituye, lo cual es evidente, el Poder Público es ajeno a ellas. No sería una instancia jurídico-política en que esas clases se expresan y manifiestan, o sea, una forma superestructural de existencia de esas clases, una de las formas políticas en que se manifiestan, sino que aparecería como una entidad sobre-puesta a ellas: con vida y existencia propias, con radical autonomía e independencia respecto a los individuos y las clases. ¿Quién los gobierna entonces? ¿Un poder ajeno, absoluto, enfrentado a los gobernados, capaz de aliarse con unos para enfrentarse a otros?

Todo gobierno, parece evidente, es expresión de un juego de alianzas, de un bloque histórico de fuerzas sociales. Por ello cambia cuando este se modifica. No es él uno de los aliados, en el plano interno en que se configura, sino el fruto, la resultante, de la interacción entre las alianzas que en él predominan y las de quienes están al margen de ellas o se les enfrentan.

Desde luego, en la realidad, existe campo evidente para contraer alianzas entre clases que tienen intereses contrapuestos. Para la defensa de la soberanía nacional, ante todo; en la lucha contra la amenaza externa a la integridad del territorio nacional, por ejemplo. Tales alianzas suponen "dejar de lado", así sea temporal y circunstancialmente, los términos del conflicto realmente existente entre las clases que se alían, por atender un interés superior: el de la supervivencia de la nación, ese espacio o arena, precisamente, en que procesan los conflictos de clase. Con base en alianzas de tal género, toman forma los gobiernos nacionales y pueden ocuparse en los problemas e intereses de la nación.

Pero el problema actual del campo y de los campesinos, el de la producción de alimentos, no da cabida a esa suerte de alianzas, aunque la de la autosuficiencia en la producción de alimentos sea una necesidad nacional. En este caso, el estado actual del conflicto social
es el factor principal de la crisis existente. Son intereses concretos e identificados, los de la estructura de dominación en el medio rural, quienes han impulsado un desarro-
llano que condujo necesariamente a la crisis. Si su predominio se mantiene,
luego aumentará sin remedio. Para salir de ella, se requiere, muy
concretamente, apelar a una corre-
lación de fuerzas diferente, capaz
de transformar la estructura de
dar. El interés nacional por la
autosuficiencia sólo será salvaguar-
dado al enfrentarse al conflicto
social que bloquea los empeños
en alcanzarla, dándole una solución
política. Nada se consigue —salvo
agvarar la crisis— viviendo el con-
flicto. O tratando de eludirlo, de
tapar el sol con un dedo, de esca-
motear la conciencia del conflic-
to social en los trazos de la estra-
tegia que hace falta para salir ade-
lante.

Replantear las alianzas, en este
contexto, tiene un significado muy
preciso. Se trata de proponerse
ni más ni menos, la hegemonía de
la alianza obrero-campesina en el
bloque de fuerzas sociales que opera
en el seno del Estado, del Poder
Público, para que tal hegemonía
sea balanza de transformación de la
realidad social: que propicie, entre
otras muchas cosas, la acumulación
de fuerzas de los trabajadores y sus
aliados, en el campo y en la ciudad,
para que nuevos cambios en la co-
relación permitan proponerse y rea-
lizar proyectos más ambiciosos de
transformación.

Frente a la ambigüedad de las
alianzas generalizadas, entre lobos y
corderos, entre una de las partes
y el todo, entre lo estructural y lo
superestructural; ambigüedad que di-
suelve y confunde en vez de unir
y esclarecer, se yergue la necesidad
de las alianzas verdaderas, las de
quienes en verdad tienen intereses
comunes, los trabajadores, que han
de proponerse, ante todo, la con-
quista de real hegemonía en la con-
figuración de la voluntad política
de la nación. (Hegemonía, desde
luego, que no supone necesaria-
mente exclusión o supresión de
otras clases. Es una alianza estra-
tégica, no “final”).

Para la reinterpretación del SAM,
a la luz de este proyecto alterna-
tivo de desarrollo basado en un
juego distinto de alianzas, es nece-
sario, en todo caso, inscribir algunos
temas centrales que la Ley de fo-
mento agropecuario puso en la mesa
de las discusiones públicas cuando
aun no se apagaban las primeras
reacciones en torno del SAM. Se
requiere analizar, en particular, la
cuestión de las formas de organiza-
ción en el campo y las relaciones
entre los productores.
III. LA ORGANIZACION SOCIAL EN EL CAMPO

1. ¿Asociación o negociación?

La discusión en torno del SAM, el ejido y la Ley de fomento agrícola y pecuario, recrudecieron una vieja polémica sobre las formas de asociación de productores en el campo. Una vez más, desafortunadamente, la ambigüedad y el mito tendieron a prevalecer sobre el rigor crítico en el curso del debate.

La necesidad elemental y evidente de que los productores se relacionen entre sí, en un ejercicio de solidaridad económica, para que la fuerza del grupo organizado eleve la potencialidad productiva del individuo o la parcela, se ha estado empleando como cortina de humo para encubrir otras pretensiones. Es cierto que la asociación de productores constituye una de las claves estratégicas del desarrollo rural; pero en una sociedad como la nuestra es indispensable distinguir la naturaleza de los productores que se asocian para que la expresión cobre un sentido definido.

En una empresa industrial privada, trabajadores y patrones no se encuentran asociados. Pueden hacerlo entre sí los patrones, para integrar una sociedad anónima, u otras formas de asociación mercantil, o los trabajadores, por ejemplo, al formar un sindicato. Unos y otros, expresan de esa manera la solidaridad que los ata a un interés común. Al coexistir en la empresa, trabajadores y patrones se encuentran enfrentados, no asociados. La relación que mantienen es objeto de una negociación, en la que ventilan la disputa de sus intereses contrapuestos. Con base en ella, pueden tener un "acuerdo en el combate", a fin de mantener la empresa en operación, cuando ambas partes consideran que ello responde a sus intereses respectivos más adecuadamente que la ruptura.

En el campo, los trabajadores pueden asociarse entre sí. Es urgente que quienes aún no lo han hecho, lo hagan. Para que su asociación lo sea realmente, es preciso que posean cabalmente la calidad de trabajadores, de campesinos, y que la forma de la asociación corresponda a sus intereses individuales y de grupo, como integrantes de una clase social específica.

Pero entre lobos y corderos no hay asociación posible. Cuando de por medio hay capitales, cuando la relación entre productores adopta la forma capitalista, o sea, cuando el derecho a los frutos del proceso productivo depende, de un lado, de los medios de producción apor-tados, y del otro, de la fuerza de trabajo empleada, no cabe hablar de asociación. Estamos ante un problema de negociación entre partes desiguales y contrapuestas, una de las cuales, la de los trabajadores,
ha de fincar su capacidad para hacer frente al interés económicamente más poderoso con el que entra en relación en la solidaridad orgánica, en la asociación, en la fortaleza colectiva. A través de la negociación, el grupo de trabajadores y el capital podrán ventilar las contradicciones de intereses inevitablemente presentes y tener, cuando así les convenga y sea posible, un "acuerdo en el combate".

Hablar en abstracto de la asociación entre ejidatarios y pequeños propietarios, o entre productores en general, se convierte por ello en una maniobra encubridora, dadas las condiciones reales del campo mexicano. No es ya el régimen de tenencia de la tierra lo que define la calidad de clase de los productores: es su posición concreta en el proceso productivo y el género de relaciones económicas y sociales que mantienen entre sí y con otros agentes —su organización— lo que determina su verdadera situación. Ejidatarios, comuneros, colonos, jornaleros, minifundistas privados, etc., son trabajadores cuando se encuentran real o formalmente subsumidos al capital, o sea, cuando tienen una relación con él, a través de la cual se realiza la valorización del valor y el proceso de acumulación privada que caracterizan al régimen de producción capitalista.

Entre los pequeños propietarios hay, sin duda, trabajadores. Aunque sean "propietarios" de sus parcelas y aparezcan como productores directos independientes, muchos de ellos han perdido ya esa calidad y se encuentran subsumidos al capital; están subordinados a él, e insertos en su lógica. Pero entre los llamados pequeños propietarios, sean o no "auténticos", lo mismo que entre los ejidatarios, o entre otros tipos de productores agrícolas, los hay también que son cabalmente empresarios capitalistas.

El SAM postula, correctamente, que la expansión de la producción y el ingreso campesino es un requisito fundamental para el logro de nuestras metas productivas y sociales en el campo. Ello exige enfrentarse a la explotación que asfixia la economía campesina, y crear condiciones para su desarrollo, rescatando para ella los espacios económicos y productivos ocupados actualmente por agentes cuya lógica de funcionamiento avanza en sentido contrario al interés de los campesinos y al de la nación.

Si se insiste en asociar a los campesinos con estos agentes, solo se logrará crear un disfraz para sistemas corporativos de explotación de los trabajadores, que en nada contribuirán a los propósitos manifestos del SAM. Se trata, por lo contrario, de concentrar el esfuerzo en auténticas formas de asociación de los campesinos entre sí, y de estimular su alianza con otros grupos de trabajadores que compartan sus intereses. En tales formas puede
hallarse la clave para enfrentarse a la explotación que bloquea sus capacidades para producción y vida, y para planterase, con realismo, objetivos superiores de transformación y desarrollo.

2. Los campesinos y la contratación colectiva

Las relaciones entre los campesinos y el capital o sus intermediarios, han tendido a desarrollarse en nuestro país en forma anárquica, irregular y frecuentemente ilegal. A menudo caen en un juego elemental y primario de fuerzas y contrafuerzas que desemboca en la violencia. Y en todo ello se encuentra, sin duda, uno de los principales factores de crisis en el campo mexicano.

Por sus contradicciones inherentes, por la imposibilidad de que se desarrollen como una auténtica comunidad de intereses, tales relaciones no pueden tomar la forma de una asociación. Tampoco, empero, pueden quedar libradas a la fuerza relativa de las partes; menos aún, cuando se entablan con base en la abrumadora inferioridad económica y política del campesino individual frente a otros agentes. Una estrategia global de desarrollo agropecuario, como la postulada por el SAM, necesita tomar en consideración explícita este problema, y ocuparse en fomentar mecanismos de regulación social de estas relaciones.

La experiencia histórica muestra que la debilidad económica relativa de los trabajadores ante el capital, ha de ser enfrentada, en el plano de la lucha económica, por medio de la organización colectiva. Los trabajadores coligados pueden obtener mejores condiciones y conquistar una porción más amplia del producto social que generan cuando dejan atrás las formas de la contratación individual, que los someten enteramente a la voluntad del capital, y emprenden el camino de la organización solidaria de clase. Con ella pueden avanzar en el logro de sus reivindicaciones económicas de corto plazo, y proponerse proyectos más radicales y ambiciosos de transformación.

De acuerdo con esa experiencia histórica, es preciso insistir en la necesidad de que los campesinos adopten el camino de la negociación colectiva cuando entran en relación con el capital y sus intermediarios. Por sus condiciones específicas, empero, han de recorrerlo con modalidades propias.

Como hecho general, los campesino no se encuentran en la condición de trabajadores asalariados. No pueden hacer objeto directo de negociación y contratación la fuerza de trabajo que ponen en juego. Sus relaciones habituales con el capital y sus intermediarios toman la forma de un intercambio de mer-
cancías, que encubre la naturaleza de esas relaciones: les da una apariencia comercial o fianciera, en que las partes que se relacionaron parecen ser productores directos y otros agentes que concurren “libremente” al mercado. La relación entre trabajo y capital que en verdad se entabla por estas vías, se halla encubierta y da lugar a todo género de confusiones e irregularidades.

Al dejar de lado los fetiches, y avanzar en la caracterización de las relaciones reales entre los campesinos y el capital, reconociendo tanto su semejanza como su diferencia con las que mantienen los obreros, es posible sugerir un sistema de contratación colectiva mercantil, como el más adecuado para regular este tipo de relaciones.

Conforme a este sistema, el desequilibrio fundamental entre el campesino individual y el capitalista se enfrentaría por medio de la organización colectiva de los trabajadores. Como no podría tratarse de una contratación obrero-patronal, puesto que el objeto directo de la negociación no sería el precio de la fuerza de trabajo, el contrato tomaría la forma mercantil: se negociaría la fuerza de trabajo materializado en mercancías, y, asimismo, la aportación de otros elementos que concurren al proceso productivo, y podrían ser puestos en juego por cualquiera de las partes: la tierra, los aperos, los fertilizantes, el crédito, etc.

En este esquema de negociación social, una de las partes sería un sujeto colectivo: los campesinos. Un sujeto que, en estos términos, podría tener la misma estructuración orgánica a que hubieran llegado los propios campesinos, con sus propios esfuerzos y decisiones, sin necesidad de imponerles un modelo o una condición constitutiva que les resultara ajena. El esquema, por tanto, respondería a un principio fundamental de todo auténtico desarrollo rural: el respeto cabal a las formas de organización de los campesinos.

El otro sujeto de la negociación sería el capital o sus intermediarios, sea que actuasen de manera individual o asociados entre sí. Aquí tendría un papel decisivo el Estado. No solo podría ocuparse en la regulación legal del proceso de negociación y contratación, como en el ámbito obrero. Podría, además, desempeñar un papel activo, al aportar total o parcialmente los elementos requeridos en el proceso productivo. Unas veces la aportación sería complementaria o supletoria de la privada; otras, tendría la función de regular las condiciones mínimas de la contratación, mediante la oferta ilimitada de las mismas; otras más, actuaría como agente de fomento, canalizando recursos públicos hacia los campesinos.

Con esquemas ajustados a estos principios, el SAM podría dar congruencia, eficacia y viabilidad,
a los apoyos que se ha propuesto otorgar a los campesinos. Evitaría caer en el peligro de fortalecer sistemas cooperativos de explotación del trabajo, inherentes a las proposiciones de asociación espiruía que han estado promoviendo las estructuras de dominación. Y además de dar paso a soluciones de fondo a la crisis rural, podría contribuir seriamente a reducir la violencia en el campo mexicano, que constituye en la actualidad uno de los mayores peligros para la construcción democrática de nuestro proyecto histórico como nación.

3. ¿Colectivizar el campo?

Estar con la agricultura colectiva no implica, necesariamente, estar con la colectivización, si esta se entiende como un proceso más o menos compulsivo de organización de la producción del campo.

A estas alturas, pocos defenderían aún la explotación individual de las parcelas, como sistema productivo: es económicamente ineficiente, socialmente atrasado, y políticamente conservador o reaccionario. Al mismo tiempo, sin embargo, ha empezado a construirse un consenso crítico que destaca las limitaciones, desventajas y peligros de la colectivización forzada, sea que la impulse el agronegocio, conforme al proceso clásico de la modernización, que la promueva el Estado con diversos motivos y propósitos y dentro de distintos contextos socio-económicos, e incluso que la patrocinen grupos o partidos políticos “independientes” o “radicales”.

La experiencia internacional exhibe pruebas empíricas, cada vez más abundantes, de los problemas de la producción agrícola atribuibles a la implantación forzada de un sistema colectivo de explotación. En el V Congreso Mundial de Sociología Rural y ante especialistas de más de 60 países, se presentaron evaluaciones locales, regionales y nacionales, sobre experiencias de países en muy desiguales condiciones de desarrollo y de diversos regímenes económicos y políticos, que pusieron claramente en entredicho los esquemas convencionales de colectivización.

En nuestro país, numerosas evaluaciones críticas han estado llegando a conclusiones semejantes. Lo ocurrido a lo largo de las cuatro últimas décadas corresponde a dos líneas de evolución y de política igualmente perniciosas: combatir sistemáticamente los empeños de organización colectiva exitosos, especialmente los emanados del mundo campesino, de una parte; y de la otra, impulsar procesos de colectivización forzada que destruyen las formas campesinas de explotación, no logran implantar esquemas productivos eficientes, alteran las pautas de producción en sentido contrario a las necesidades sociales,
y tienden a operar como sistemas de dominación y manipulación, para garantizar una expansión de tipo capitalista, opuesta a los intereses de los campesinos y de la nación. Unas veces, los programas de colectivización han resultado tan costosos como fallidos, y cuando se interrumpe el masivo apoyo gubernamental que los acompaña por un tiempo, la organización colectiva entra en un proceso de deterioro que a menudo coloca a los campesinos en condiciones peores que las que tenían antes de la iniciación del programa. Otras veces, cuando la acción tiene éxito económicamente, representa un retroceso social y político, por la medida en que la participación de los campesinos en la conducción y desarrollo de la explotación colectiva resulta meramente formal, y opera como disfraz de un esquema autoritario, más o menos corporativo de organización de la producción.

El análisis de las escasas experiencias de colectivización forzada que ha tenido éxito cabal, en todos sus aspectos, permite explorar las raíces de los problemas involucrados y apuntar una posible solución. En esos casos, los esfuerzos de colectivización parecen haberse insertado en un impulso profundo, emanado de los campesinos, que les llevaba en esa dirección. El programa, en tales condiciones, se convierte en un apoyo útil y eficaz para el empeño organizativo de los propios campesinos. Su participación orgánica en el proceso, con base en sus propias experiencias y sistemas de decisión y consenso, permite combatir las pretensiones burocráticas de los programas de colectivización. Al mismo tiempo, crea la dinámica social y las condiciones objetivas y subjetivas que hacen posible superar las enormes dificultades inherentes a un proceso de esta índole.

La evaluación de una de las experiencias de colectivización de mayor dimensión e intensidad de los últimos años, la de la Chontalpa, llevó a un especialista a concluir que el problema se derivaba, sobre todo, de un sesgo sustantivo del programa: los organismos técnicos tenían el poder sin la responsabilidad, y los campesinos, la responsabilidad sin el poder.

De eso se trata, en el fondo. Conducir el empeño de arriba abajo, desde el poder, para implantar formas y modelos de organización que se consideran apropiados en el gabinete del técnico o del político, no es camino del desarrollo rural.

Al destacar la necesidad de que los esfuerzos de organización colectiva de la producción agrícola tengan como protagonistas principales a los propios campesinos y a sus organizaciones, no se excluye la acción del Estado. Por el contrario, ante los obstáculos a que se enfrentan los campesinos cuando intentan avanzar en la construcción de sus
organizaciones económicas, sociales y políticas, es indispensable que cuenten con apoyos efectivos por parte del Estado, el cual ha de desempeñar en el proceso un papel activo de promoción y respaldo. Lejos de combatir o reprimir esas organizaciones colectivas de los campesinos, como con frecuencia hace, el Estado necesita concentrar sus esfuerzos en su fomento y apoyo, lo cual supone modificaciones en el juego de alianzas que lo constituyen. Como es evidente, este cambio sólo es posible con el de la correlación política de fuerzas que puede impulsar las acciones públicas en una u otra dirección, tanto en el plano local y regional, como en el nacional. Y por ello, precisamente, el tema tiene plena actualidad. Diversos indicios, que han de ser interpretados en el contexto de la crisis actual en la producción de alimentos, pueden estar indicando que la correlación de fuerzas empieza a ser favorable a los campesinos. Y proponerse que lo sea, en todo caso, empienando en ello un esfuerzo decidido en el marco de la estrategia de acumulación de fuerzas que necesitan adoptar los trabajadores del campo y de la ciudad en las condiciones actuales, es una tarea fundamental.

En la hora del SAM, cuando este se encuentra ante la alternativa de convertirse en un proyecto político de los campesinos, que les permita avanzar en la transformación que todos necesitamos, o en un programa administrativo más, atrapado en inercias institucionales o políticas que retomen las líneas convencionales y así agravén la crisis, la postura por adoptar en esta cuestión fundamental resulta decisiva.

IV. LA PERSPECTIVA

1. De la previsión demagógica a la programática

“Pronto llegará el día en que México no tendrá ninguna necesidad de importar alimentos”, dijo el general Antonio I. Villareal, ministro de Agricultura y presidente de la Comisión Nacional Agraria en el gobierno de Obregón, el 10 de noviembre de 1921. Al tiempo que realizaba una vigorosa defensa de la reforma agraria, se refería así, sin nombrarlo, a un desplegado público unos días antes en la prensa. Lo firmaba el Sindicato de Agricultores, al que pertenecían conocidos hacendados, y en él, además de ponerse en alto los méritos de la propiedad privada, se exigía suprimir las medidas “violentas y atentatorias” que estaban llevando a cabo las comisiones agrarias. O sea: se demandaba que no se repartieran más ejidos.

No deja de ser lastimoso este
desbordante optimismo del general Villareal, cuando a 60 años de distancia el país está importando la cuarta parte de sus consumos básicos. Hoy podemos ver con claridad el carácter demagógico de su previsión: anuncia y promete lo que el país necesita y espera, pero no logra formular en programa viable la esperanza.

Y es que la previsión, esa fuerza material de enorme importancia histórica, solo puede ser efectivamente programática, o sea, convertirse en un orden organizado de realización, cuando asume plenamente en su seno el conflicto social.

En agosto de 1914, Zapata respondía a los titubeos de Carranza respecto a la reforma agraria, con un manifiesto en el que sostenía que el campesino se había levantado en armas “no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino para procurarse un pedazo de tierra que ha de proporcionarle aliento y libertad”. Para que triunfe el campesino, advertía Zapata, para que se logre una paz que no se conseguirá mediante la fuerza de un gobierno militar, hace falta “crear intereses vinculados estrechamente a la Revolución”. Y este parece ser el orden organizado de realización que sigue haciendo falta. Aquí puede fundarse la vigencia actual del zapatismo.

Según los datos del Sistema alimentario mexicano, “en las zonas rurales, un poco menos del 90% de la población padece subconsumo calórico y protéico en algún grado, esto es, 21 millones de personas. Alrededor de 9.5 millones de ellas tienen un déficit calórico grave que va del 25% al 40% con respecto al mínimo normativo”

13 Considerando el país en su conjunto, unos 35 millones de mexicanos, la mitad de la población, no logran en la actualidad alcanzar el mínimo de 2750 calorías y 80 gramos de proteínas por persona y día.

También en el Sistema alimentario mexicano se dan informaciones del contexto: “Cinco o seis firmas, la mayoría norteamericanas, controlan cerca del 85% del mercado mundial de granos. Y estos tienden a encarecerse a medida que, por un lado, la asombrosa productividad de la agricultura norteamericana empieza a encontrar límites... y, por el otro, los crecientes déficits mundiales de granos empujan rápidamente hacia arriba los precios. Se calcula que, en 1985, los países en desarrollo tendrán un déficit del doble que el actual: 85 millones de toneladas métricas. Los productos que más se han encarecido en el mercado internacional, durante los últimos 5 años, han sido los cereales y las oleaginosas, cuyos precios se elevaron por encima de las

13 Oficina de... op. cit., págs. 8 y sigs.
manufacturas y del mismo petróleo".\textsuperscript{14}

Un país de cauce político a sus contradicciones y avanza así, racional y democráticamente, en la formulación de su proyecto, cuando es capaz de administrar sus esperanzas. Pero esta operación no consiste en la dosificación de las promesas, para darles credibilidad y hacer del presente un porvenir siempre pospuesto, sino en sujetar la inquietud y la energía del pueblo a una efectiva previsión programática: la que aporta la estructura orgánica del orden programado de realización.

En México no se padece de hambre y desnutrición por falta de recursos, por insuficiencia de capacidades o por adversidades naturales. Es cierto que nuestra morada es tan rica como hostil. Que doblegar a las fuerzas de la naturaleza y ponerlas al servicio de nuestras necesidades ha sido y sigue siendo una tarea erizada de enormes dificultades. Pero ninguna de ellas, física o técnica, nos ha detenido. Los obstáculos son de otra índole, como cada vez se puede comprobar más claramente. Se asocian todos con el conflicto social. 

No hay orden programado de realización que pueda instaurarse si carece de un pacto social. Y en una sociedad como la nuestra, ningún pacto social puede plantearse con ignorancia o menosprecio del conflicto. De ahí que una auténtica previsión programática tenga que incluir, para serlo realmente, la estrategia de encauzamiento y superación del conflicto social. Tal estrategia parte, hoy por hoy, de la movilización popular y de su expresión natural: las organizaciones democráticas. Sólo de ellas cabe esperar alimentos y libertad, como quería Zapata.

2. El SAM y los eucaliptos

Es el SAM, en definitiva, una proposición radical: arraiga profundamente en nuestro proyecto histórico, va a las raíces del problema, representa un viraje radical. Admitirlo significa, entre otras cosas, que la línea adoptada en las últimas décadas tendría a apartarse y apartarnos de nuestro proyecto histórico, y nos desarragaba de él, como a los campesinos de su tierra.

Como proposición radical, el SAM define una estrategia de alcance nacional y trascendente. Su viabilidad depende de nuestra capacidad social para asumirlo como proyecto político, sustentarlo en determinadas alianzas de clases y correlaciones de fuerzas en el plano local, regional y nacional. Es el SAM, por tanto, una definición estratégica de gran aliento, entidad... y plazo. Aunque responde a exigencias de la coyuntura y supone

\textsuperscript{14} Ibidem., pág. 5.
acciones inaplazables, necesita un lapso de maduración en todos los órdenes: técnico, administrativo, económico, social, político.

Surge el SAM como los eucaliptos: con gran fuste y escasa raíz. Esta es su contradicción. Por ser lo que es, para serlo realmente, el SAM necesita enterrar profundamente sus raíces en nuestro suelo histórico y nuestra estructura social. Le hace falta adquirir una forma orgánica específica, dentro y fuera de los aparatos gubernamentales, que le permita mantener la dirección del trazo estratégico que lo define, dar congruencia a las acciones que pueden constituirlo y asegurar su viabilidad y éxito.

Nace desproporcionado: con más cabeza que pies o manos. Lo paradójico es que las raíces reales del proyecto, las de su dimensión histórica, son vigorosas y profundas. De hecho, el SAM puede ser visto como la expresión técnica y formal de una definición estratégica capaz de recoger, asimilar, procesar e interpretar correctamente demandas sociales que por años se hicieron sentir, y que no lograban penetrar el caparazón de los equipos técnicos y administrativos de la planeación gubernamental y de los aparatos ideológicos del Estado.

A la hora de la formulación concreta, sin embargo, no se logra, primero, suscitar la participación cabal de los protagonistas sociales y políticamente interesados en la estrategia y promover, después, la estructuración orgánica correspondiente. Queda el SAM, en tales condiciones, separado de sus propias raíces, de las que le dieron origen y pueden ser su base de sustentación.

Estamos aún a tiempo. Tenemos, desde luego, el que hace falta para poner en marcha la estrategia de transformación que necesitamos, con el nombre y términos del SAM, o con cualesquiera otros pertinentes. Estamos a tiempo de que el propio SAM logre convertirse en el proyecto político que es su propensión natural.

Sin embargo, se mantiene el riesgo de que se degrade a un programa técnico o administrativo más, en cuya realización se niegue a sí mismo. El riesgo no se refiere tanto al fracaso del SAM, que sería grave, sino a que el hecho funcione como vacuna social y nos prevenga contra el camino correcto, en vez de contribuir a recorrerlo.

El riesgo se agrava por la continuada ambigüedad, ambivalencia y confusión de las reacciones que el SAM ha suscitado: que sus aliados reales y potenciales lo nieguen y rechacen una y otra vez, con respuestas mecánicas y acríticas, y que sus enemigos reales y potenciales lo aplaudan e inten ten tomarlo en sus manos para socavarlo y destruirlo.

Sostener que el SAM está en plena realización, que avanza a toda vela y pronto arrojará resultados concretos, equivale a negarlo. No era cuestión de ajustar una tuerca
aquí y otra allá, dar un breve golpe de timón, realizar ajustes menores y cambiar los dineros de un cajón a otro. No era tarea para burócratas menores y tecnestructuras. No era, no es, un proceso idílico hacia un triunfo inmediato, que estaba al alcance de la mano y se toma en ella como un gesto fugaz y fluido. No era, no es, un empeño de corto plazo, ni circunstancial, ni sencillo. El riesgo es que se le convierta en ello; en una escenografía efímera, en un disfraz de la pretensión de prolongar la orientación estratégica cuya negación se propuso explícitamente en el SAM.

El SAM planteó orientar el esfuerzo productivo hacia el logro de la autosuficiencia nacional en la producción de alimentos. Pero no es esto, reiteremoslo, lo que define su diferencia y su mérito, aunque es el suyo recoger con claridad y tino una orientación política de tanta importancia. Lo propio del SAM es su compromiso manifiesto con los campesinos, a los que atribuye el papel protagónico principal en la realización de la tarea. Hacer real ese compromiso es una tarea inmensa y compleja, que supone, entre otras muchas cosas, la capacidad para transformar el poder, a fin de que sea posible transformar la realidad productiva y social. Y esto, cambiar las estructuras de poder que constituyen el principal obstáculo al desarrollo que necesitamos, es tan fácil de decir como difícil de llevar a la práctica. Nos impone un reto gigantesco, que muchos llegan a considerar superior a nuestras fuerzas actuales, y que, en todo caso, exige ponerlas en máxima tensión y empeñarlas lúcida y concertadamente en la obra. Se trata, ni más ni menos, de una de las tareas centrales de la construcción democrática de nuestra sociedad, que está en el primer lugar de la orden del día de las prioridades nacionales de la actualidad.

Los tiempos han cambiado para todos. Tiempo es ya de cambiarlo todo. Lejos de hacerlo para que nada cambie, para modificar el decorado superestructural en un esfuerzo inútil por mantener intocadas las estructuras, se trata de ir al fondo, a la base, al suelo en que nos movemos, el que múltiples fuerzas están tratando de quitarnos de abajo de los pies. Son tareas para hoy. Recordemos también que mañana puede ser demasiado tarde.